

ELECCIONES INTERMEDIAS, RESULTADOS Y PERSPECTIVAS

Jesús MARTÍNEZ ÁLVAREZ

SUMARIO: I. *Introducción*; II. *Los actores en el proceso electoral*; III. *Resultados de la contienda*; IV. *Propuestas*; V. *Colofón*.

I. INTRODUCCIÓN

Expreso mi reconocimiento y gratitud a la Universidad Nacional Autónoma de México por su invitación a participar en este seminario, en el que diversos actores políticos y sociales nos proponemos compartir con ustedes algunas reflexiones vinculadas al reciente proceso electoral federal cuya culminación se dio con la votación y su calificación en julio de 2003.

Como resultado de ese proceso se redefinió la correlación de fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, como contrapeso frente al Poder Ejecutivo. Ello da pie a una nueva fórmula de concertación que permita, como lo ha venido proponiendo Convergencia, establecer los acuerdos políticos que garanticen la gobernabilidad del país.

Un proceso electoral no se inicia ni termina el día de la votación, aunque éste da nombre a las fuerzas políticas que en adelante representarán a los ciudadanos en el ámbito gubernamental y legislativo. Sin embargo, es parte del ejercicio de organización y reflexión de los partidos para establecer su plataforma, definir su

propuesta de acción y a elegir a quienes serán sus candidatos en la contienda electoral.

Desde el ámbito de la vida democrática, nada hay más vigoroso que la acción político-electoral. Los ciudadanos tienen ante sí las propuestas y pueden, o no, hacerlas propias, compararlas y, finalmente, tomar una decisión sobre qué institución o qué ciudadano consideran más apto para representarlos.

En ello estriba la importancia de los procesos electorales, pero más relevante aún es que su resultado facilite la solución de los problemas que afectan a nuestra sociedad y que se expresan todos los días, de las más diversas formas.

Hace apenas tres años, el 2 de julio de 2000, en la búsqueda de la solución de esas demandas, los mexicanos marcaron un hito en su historia contemporánea. Después de 70 años en el poder, el PRI dejaba la casa presidencial para dar paso a un nuevo partido y a su candidato.

Tengo la plena convicción de que los ciudadanos optaron votar por el rechazo a un modelo de gobierno que estaba rebasado por la realidad y que pronosticaba seguir agudizando los grandes problemas que le aquejan. Es decir, votaron por dejar a un lado la inseguridad, la corrupción, la impunidad, las grandes desigualdades y los cada día más deficientes servicios de salud, educación y seguridad social. Es decir, votaron por un candidato y por un partido que consideraron pudiera representar una alternativa a la solución de sus problemas.

De allí el valor de la alternancia, que concedía al país la posibilidad de iniciar, con el aval social, un nuevo mandato. Sin embargo, pasado este trienio las expectativas han sido rebasadas por la realidad. Se ha generalizado la pobreza, los empleos han decrecido de forma alarmante y la economía se ha estancado. Lo que es evidente en la agudización de las desigualdades que dejan al ciudadano promedio indefenso ante el abuso y la inacción gubernamentales.

La coyuntura del año 2000 fue desaprovechada. Uno tras otro, los intentos del gobierno federal de dar orden a un proyecto, aún no definido, han fracasado. La reordenación del gabinete presiden-

cial, creando para ello superestructuras burocráticas, a costa del erario federal y de verdaderas prioridades sociales, que en este lapso no sólo han perdido validez sino que, la gran mayoría de ellas han desaparecido.

La alternancia no dio pie, como esperaban los mexicanos, a la transición democrática porque el cambio político no vino acompañado de una reingeniería gubernamental adecuada. La reforma del Estado, prioritaria sin duda, debe empezar por una reforma de gobierno que permita la sustitución de muchos de los esquemas de trabajo con que la vieja burocracia gubernamental se viene desempeñando y adicionada con una nueva estructura, más eficiente y ordenada, que releve vicios por resultados.

Lo cierto es que la flexibilidad del sistema político mexicano ha permitido que los errores y la inacción gubernamentales, sean rebasados por la actividad burocrática regular que no ofrece mejores servicios o mayores resultados, sino la operación simple y llana del aparato de gobierno.

Este año, los electores enfrentaron nuevamente un proceso electoral de dimensiones mayúsculas. Once partidos políticos, que aplicaron un gasto superior a los 5 mil millones de pesos para sus campañas en conjunto, trabajaron para hacer un llamado a los poco más de 65 millones de electores registrados ante el Instituto Federal Electoral (IFE). La expectativa en la participación electoral, tras la evidente falta de entusiasmo ciudadano por conocer las propuestas y expresar su interés de acudir a las urnas no consideraba sino una participación de más o menos 50% del electorado.

Las campañas fueron, en corto tiempo, una prueba de resistencia para el sistema político que enfrentaba no sólo a la opinión pública, sino además el comportamiento de los diversos actores electorales que, en buena medida, ayudaron entorpecer el desarrollo armónico del proceso mismo.

II. LOS ACTORES EN EL PROCESO ELECTORAL

Para el Instituto Federal Electoral ésta sería la última elección federal que llevaría a cabo el Consejo General vigente, el aparato de administración electoral que, tras ocho años de operación comenzó a mostrar desgastes severos en su sistema de operación y opinión. Las sesiones del IFE comenzaron a evidenciar las posiciones y afinidades partidarias de algunos de los consejeros e, incluso, la necesidad de dejar huella sobre temas que siendo importantes, enturbiaban el proceso electoral haciendo más difícil la realización de las tareas políticas sin entrar a debates de coyuntura, más allá de las propuestas electorales formales.

Los partidos políticos, por su parte, enfrentaron a una opinión pública desencantada con la actividad pública y recibieron el rechazo a sus propuestas o a sus debates. Esto se vio dificultado por las pugnas internas que la mayoría de los partidos vivían en sus organismos de cúpula y que dificultaba la toma de decisiones estratégicas, rebasada por los intereses de grupo de algunos de sus militantes.

Además, otros actores influyeron en la generación de una mediana difusión a las propuestas de los partidos. Si bien es cierto que un debate de once propuestas electorales era prácticamente imposible de llevarse delante de forma consecutiva durante los dos meses y medio de campaña, los medios de comunicación y algunas instituciones públicas decidieron que era mejor buscar sólo a las fuerzas políticas más viejas para que fueran ellas las participantes en la mayoría de los debates, discusiones, conferencias y foros realizados para conocer de las ideas y los candidatos de estos partidos.

El resto de los partidos tuvieron que abrirse espacio propio en medios e instituciones para hacer llegar al ciudadano sus propuestas. El costo de un esfuerzo de esta naturaleza fue la evidente distracción en las campañas que, por motivos de identificación de emblemas se concentró en la distribución de la propaganda desplegada en las calles de las principales poblaciones del país. El

monto calculado de gasto para este esfuerzo sólo fue de cerca de 10 mil millones de pesos que equivalen a un 70% del subsidio federal de la UNAM, que en este año ascendió a 14.1 mil millones de pesos.¹

La contienda fue inequitativa en éste y muchos ámbitos. La búsqueda de espacios en los medios de comunicación masiva alcanzó montos de varios cientos de millones de pesos, en espacios que las empresas televisoras y radiofónicas vendían, pero los cuales no ofrecían arenas para el debate de las ideas.

Los gobiernos estatales hicieron lo propio. En la mayor parte de los estados, principalmente los gobernados por el PRI, desplegaron todo un operativo electoral que les permitiera garantizar el triunfo de sus candidatos; se desviaron recursos públicos, se presionó o cooptó a organizaciones sociales haciendo toda clase de ofrecimientos; resumiendo, en este pasado proceso electoral para elegir diputados federales, como nunca el PRI utilizó todo tipo de maniobras con tal de garantizar el mayor número de posiciones en la actual legislatura, y todos los demás partidos dejamos ver nuestra incapacidad y deficiente estructura y capacidad política que nos permitiera impedir acciones de esta naturaleza. El gobierno federal hizo lo propio a través de los medios de comunicación, multiplicando sus mensajes institucionales dando a conocer las acciones de gobierno o la obra pública en horarios privilegiados y con claras intenciones políticas.

Los debates en la Cámara de Diputados se concentraban en pugnas partidarias. ¿Cómo apoyar nuevamente la formación de la estructura legislativa si el esfuerzo daba como resultado pugnas, debates inocuos y escasos resultados? En este marco, el ciudadano quedaba en medio, buscando tomar una decisión sobre si acudir o no a votar y cuál sería la opción por la que expresaría su confianza.

Se escribirían artículos sobre esta indefensión total del ciudadano, en la que se hacía la pregunta sobre qué debería hacer ante este

1 Sotelo Valencia, Adrián, "Las elecciones en México de cara al abstencionismo", *Rebelión*, México, 30 de junio de 2003.

panorama el elector. José Antonio Crespo, analista político, se atrevería a contestar:

Pues abstenerse, pero no por indiferencia, desinterés o desconocimiento, sino a raíz de su observación incluso minuciosa de los partidos y los gobiernos que de ellos emanan... Se trataría —concluyó— de una abstención activa, deliberada, con la cual enviar un claro mensaje de protesta contra todos y cada uno de los partidos...²

III. RESULTADOS DE LA CONTIENDA

La madrugada del 3 de julio de 2003, tras una intensa jornada de votaciones y conteo, se informó que concurrieron a las urnas ese domingo solamente poco más de 26 millones de electores, esto es 41% del padrón electoral, la cifra más alta en el último cuarto de siglo.³

De las once fuerzas políticas solamente seis conservaron el registro. Los resultados revelaron que el PAN disminuyó su presencia en el Congreso y permaneció en segundo lugar en el número de espacios en la Cámara de Diputados; el PRI logró obtener una mayoría, sin incorporar a nuevos electores. Su acuerdo electoral con el Partido Verde, además, hace que su presencia política sea aún más relativa, tras el conteo de votos; y el PRD, duplicó su presencia en la Cámara Baja, pero disminuyó sensiblemente su base militante, ya que los votos los obtuvo fundamentalmente en cuatro estados donde tiene influencia política, pero perdió plazas significativas, sobre todo en el sureste del país.

Lo cierto es que el electorado, diverso en su participación y en su decisión, optó por un equilibrio de poderes, por un pluralismo político en la Cámara, que representara un verdadero contrapeso

² Crespo, José Antonio, “¿Votar o no votar?”, *El Universal*, México, 30 de junio de 2003.

³ Solamente 1988, donde se abstuvieron 52.58% de electores y 1985, donde fue el 49.31% el que se abstuvo, se acercan a esta cifra en los años recientes.

del Poder Ejecutivo. El equilibrio de poderes que garantiza nuestra Constitución es la mejor fórmula para asegurar que el interés popular se vea expresado, tanto en el trabajo legislativo como en acciones de gobierno.

El trabajo que la nueva legislatura debe de realizar inicia con la generación de los acuerdos básicos, al interior de las fracciones parlamentarias y entre éstas para dar continuidad al trabajo político y legislativo que corresponde. Existen incluso algunas reformas que de manera inmediata podrían desarrollarse para permitir que la estructura democrática salga adelante.

IV. PROPUESTAS

América Latina, nos señala Latinobarómetro 2002, es un continente donde se da un alto valor a la democracia, representada sobre todo por la libertad; la igualdad; el derecho al voto; un gobierno de, por y para el pueblo; la paz y la unidad social y la defensa del Estado de derecho.⁴

Sin embargo, esa confianza conserva una amplia distancia sobre las instituciones que conforman a nuestra sociedad latinoamericana. Mientras 71% confía en la Iglesia, 45% en la televisión o 38% en las fuerzas armadas o la policía; apenas 23% confía en su Congreso y 14% en los partidos políticos. Estos resultados en el ámbito latinoamericano encuentran una gran similitud con la percepción que tienen los mexicanos en estas instituciones. El esfuerzo para revertir dicha opinión es mayúsculo. Se requiere que las instituciones y los actores políticos pongan lo mejor de sí, incluido su compromiso social, para revertir la desafortunada opinión que se tiene de la labor política, y convertirla en una fuerza vital que anime la transformación definitiva que requiere el país para garanti-

4 Resultados del Latinobarómetro 2002, tomado de la página electrónica Latinobarómetro.com.

zar la transición por la que tantos años hemos venido esforzándonos.

A la vista de los resultados de la contienda y mucho antes de que ella concluyera, en Convergencia, de conformidad con la plataforma electoral presentada en el pasado proceso electoral, hemos hecho las siguientes propuestas:

- Una ley de partidos políticos, que entre otras cosas transparente sus reglas internas para la selección de candidatos; transparente el manejo de los recursos y rinda cuentas no sólo al IFE, sino también a sus militantes y a la sociedad en general, evitando con esto lagunas que actualmente existen y que permiten, en muchos casos, interpretar o legislar al propio IFE o a los tribunales electorales correspondientes.
- Se propone un solo órgano electoral nacional que garantice verdaderamente la transparencia y legalidad de todos los procesos electorales, estableciendo el servicio civil de carrera, para evitar, como sucede hasta la fecha, que los órganos electorales locales sean simplemente oficinas dependientes del Ejecutivo estatal.
- Se propone una sola Ley Federal Electoral para todos los procesos electorales del país, ya que para los procesos electorales existe una ley electoral para cada estado, que cada día es modificada con el objeto de evitar el avance democrático que de manera natural se viene dando, evitando las alianzas y coaliciones, y estableciendo una serie de candados que hacen más difícil la participación de los partidos que son oposición en esos estados.
- Reducir a cuatro el total de procesos electorales que existen en un sexenio: dos procesos electorales para elecciones locales de tres y seis años, y dos procesos electorales para elecciones federales de tres y seis años, en lugar de las cerca de setenta elecciones que actualmente se realizan en el país.

- Elevar a rango constitucional la iniciativa popular, el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato.
- Establecer la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, ya que el partido ganador en el próximo proceso presidencial del año 2006, no obtenga un porcentaje mayor al 36%, lo cual impediría la gobernabilidad y lograr los acuerdos y consensos que el país requiere.
- En la nueva ley del COFIPE, deberán regularse las precampañas y disminuir los tiempos de campaña, así como reducir el financiamiento a partidos políticos y propiciar la equidad en los medios de comunicación, con el objeto de que la ciudadanía tenga la posibilidad de presenciar debates entre candidatos y conocer verdaderamente las propuestas de los partidos políticos.

Todo esto traerá como consecuencia un ahorro considerable de recursos públicos. Los procesos electorales en México son de los más costosos del mundo, inconcebible que se dé en un país que cuenta con más de la mitad de su población en pobreza extrema. De acuerdo con estudios comparados, en Europa cada voto cuesta un dólar o un dólar cincuenta; en algunos países latinoamericanos, el costo no es mayor de dos dólares por voto. En Estados Unidos, apenas un dólar; en el Reino Unido, sólo 80 centavos de dólar por voto ciudadano. En esta perspectiva, México se encuentra entre los países cuyo voto alcanza los seis dólares; incluso cada voto ha costado, como fue el caso del 2003, cerca de *ocho dólares* debido al alto índice de abstencionismo presentado.⁵

Esto sin contar la desviación de recursos que hacen los gobiernos estatales y los municipios que tienen capacidad de hacerlo, y que normalmente están destinados a los programas sociales, y que es una cifra negra no determinada hasta la fecha, pero se puede

5 Tomado de “El costo de las elecciones”, Asociación Civil Transparencia, www.transparencia.org.pe

sostener de que prácticamente es otro tanto más de lo que cuesta actualmente un voto en México.

IV. PERSPECTIVA

Las elecciones de 1997, las de 2000 y las de 2003 arrojaron un Congreso donde el Ejecutivo federal no tiene mayoría absoluta en ambas cámaras. Esta nueva característica de la democracia mexicana que ya se venía presentando en diversos estados de la República, se asentó a nivel federal. Es prácticamente un hecho que en el 2006 tengamos nuevamente un presidente sin mayoría en ambas cámaras.

La gobernabilidad en el país ya no es sostenible con la fuerza de un solo partido, se necesitan establecer alianzas y acuerdos en torno a un proyecto de país. El diseño actual del sistema político y electoral no permite que las fuerzas políticas tengan incentivos para la colaboración; lo mismo sucede entre los poderes de la Unión, particularmente entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Hoy, todo aquel mexicano que esté preocupado por contar con un proyecto de país, que quiera formar o no parte del próximo gobierno, o que pretenda ser candidato a la Presidencia de la República, deberían estar preocupados por ser los principales promotores de esta nueva alianza, de las nuevas reglas del juego democrático en un sistema de gobierno dividido, sin mayoría, en el Congreso de la Unión.

Es el momento oportuno, para todos aquellos actores políticos que no se sienten representados en los principales referentes políticos, de ir construyendo una gran convergencia ciudadana que se convierta en un proyecto capaz de incidir de manera determinante en las reformas y en los procesos políticos de aquí al 2006. Una cuarta opción de gobierno, diferente a la de los partidos tradicionales.

Pero una cuestión sí debe quedar clara: el próximo presidente de la República, independientemente del partido al que pertenezca, tendrá las mismas dificultades que el actual Ejecutivo federal, porque no es posible gobernar de forma alternativa si se sigue mante-

niendo intacta la estructura del viejo régimen. Por ello, Convergencia está proponiendo una revisión integral de la Constitución que no sólo se ajuste a las reformas que hoy requiere el país, sino que se actualice para que responda a los nuevos retos del presente siglo.

Resultado de este proceso podremos alcanzar a establecer un nuevo pacto social, la cuarta República, que retome el espíritu federalista de la Constitución de 1824, cuando nace el Estado mexicano: la primera República; el compromiso laico y la recuperación del federalismo, la del 57: la segunda República, y las aspiraciones sociales de la de 1917: la tercera República.

V. COLOFÓN

Escenarios políticos rumbo a las elecciones federales de 2006:

1. Las tres fuerzas tradicionales (PRI, PAN y PRD) agudizarán sus problemas internos antes de la elección del año 2006. División que se dará en su lucha interna por el poder, lo que propiciará el abandono o la no participación en estos partidos de destacados militantes con presencia y prestigio.
2. A partir de 2004 surgirán nuevas figuras en el escenario político y se consolidarán otras, que no tendrán cabida en los partidos tradicionales, y tampoco optarán por militar de una manera activa en las otras fuerzas políticas restantes.
3. Esto nos lleva a la conclusión de que los candidatos que postule el PRI, el PAN y el PRD, no llenarán las expectativas de un amplio sector de la ciudadanía que sigue esperando los cambios que consideraba podían desatarse a partir de la alternancia y, que estaríamos hablando, de un universo de más del 50% de los probables votantes.
4. Como consecuencia, en la medida en que se logre conjuntar a diferentes actores políticos con presencia nacional, que estén militando o no en diferentes partidos; a verdaderos liderazgos regionales; y que logren hacer un frente público y abierto

a la sociedad, comprometiéndose públicamente con un gran pacto social, que establezca claramente sus compromisos y que nos permitan perfilar un nuevo proyecto de nación. Una gran convergencia ciudadana, donde la confianza no se deposite en una sola persona, sino en todo un equipo de trabajo, cada uno con responsabilidades concretas. Un gran frente plural que transmita y garantice confianza al pueblo de México.

Finalmente, como afirmaba un destacado intelectual y político mexicano que “para transformar una sociedad hay que empezar por transformar el derecho, por transformar la ley”.⁶ Nuestra labor de transformación en la Cámara de Diputados acaba de empezar, y tenemos para ello la oportunidad de construir los espacios que requiere la transición política que estamos empeñados en lograr. La unidad a la que convocó el Ejecutivo federal en su pasado informe de gobierno, no será la uniformidad que espera y exige. Será la unidad política en torno a proyectos que cumplan las aspiraciones de los mexicanos. A eso nos hemos comprometido los legisladores de Convergencia y en eso estamos empeñados.

6 Reyes Heróles, Jesús, *Discursos*, México, 1985.